





[JOSÉ FOLGADO, CONSEJERO
DE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA]

■ TEXTO: GUSTAVO MATÍAS Y EMILIO GONZÁLEZ | FOTOS: JESÚS UMBRÍA

“LAS CAJAS DEBERÍAN IR A UNA CONCENTRACION”

“EN LA GESTIÓN DE LAS CAJAS HAY DIFICULTADES POLÍTICAS... PERO SI LAS CAJAS TIENEN PROBLEMAS DE NATURALEZA FINANCIERA LA CULPA ES DEL BANCO DE ESPAÑA, QUE NO OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” ASEGURA, AL TIEMPO QUE PIDE “MANDO EN PLAZA” PARA UNOS ORGANISMOS REGULADORES PROFESIONALIZADOS

Q ué aportará un profesor, técnico y político como usted a REE?

Respuesta. Aportaré experiencia de vida y conocimiento en diversos frentes a una gran empresa que centraliza el transporte eléctrico. Como reiteraré desde la Secretaría de Estado de la Energía, es esencial para la eficiencia de todo el sistema eléctrico que el transporte funcione bien, lo que exige una reglamentación estricta, una remuneración adecuada y una planificación de inversiones en redes que garantice la seguridad y eficiencia en el suministro. Y quiero aprovechar para agradecer la confianza depositada en mí al nombrarme consejero independiente...

P. ¿Dónde está el futuro de Red Eléctrica, en España o en el extranjero? Y concretamente ¿en las interconexiones con Francia y Marruecos o en los servicios a países iberoamericanos?

R. Su core business tiene que estar en España. Pero REE juega un papel determinante con las políticas del Gobierno a la hora de garantizar la seguridad de los suministros mediante las necesarias interconexiones. Es el caso del proyectado mercado ibérico de la energía con Portugal. Mayor importancia, si cabe, adquiere para ambos países la conexión europea a través de Francia, dentro del proyectado mercado único europeo de la electricidad. Empresas como REE pueden jugar un papel protagonista en el incremento de esas interconexiones con toda Europa, imprescindibles para poder hablar de mercado único europeo de la energía y facilitar la libertad de movimientos de capitales en el sector. Está muy bien la actual configuración de REE en su doble función separada de propietario de redes y operador del sistema. Esto garantiza los tres grandes objetivos: el desarrollo de toda la red para evitar cuellos de botella, las interco-

nexiones con los países vecinos -incluido Marruecos- incrementando las conexiones de Francia como brazo ejecutor, y lograr la conexión eléctrica gratuita con Baleares. Otra cuestión bien distinta son las conocidas dificultades que ecologistas y gobiernos autonómicos o locales pueden poner al despliegue de esas redes. En cuanto a las relaciones con algunos países iberoamericanos, Red Eléctrica aporta experiencia y solvencia, como pocos en el mundo, en este sector estratégico.

P. Por un lado, las eléctricas están esperando que la resolución del déficit tarifario y las subidas del petróleo se traduzcan en subidas mayores al IPC y por otro, el Gobierno está interesado en contener los recibos de la luz y, de paso, controlar un sector tan importante como el eléctrico. ¿Cómo se pueden conciliar ambos intereses?

R. Es lógico que los gobiernos se resistan a aceptar que el recibo de la luz



“No tiene sentido que aquí se diga no a lo nuclear y el Gobierno promueva, por otro lado, la importación de electricidad producida por nucleares francesas”



genere dificultades para la estabilidad de precios, e incluso una contención en la evolución de las tarifas reguladas espolea a las empresas a buscar fórmulas para ser más eficientes por otras vías. Pero también es cierto que el coste medio de producir un kwh ha registrado en los últimos años fuertes subidas por varios factores, sobre todo por el incremento del precio de los productos petrolíferos, especialmente el gas natural con el que se produce la cuarta parte de la electricidad que consumimos, y el pago de las primas por las energías renovables. Habría que pensar, como se hace en otros países desarrollados, en apoyos presupuestarios públicos y no cargar todos los incentivos a las renovables en el recibo de la luz.

P. ¿Por qué, pese a esas tensiones, REE marcha mejor que las eléctricas?

R. Es una empresa muy bien gestionada, en general excelentemente regulada y de las más solventes del mundo, pero no voy a entrar en comparaciones con otras empresas...

P. ¿Hay esperanza de que la producción y distribución no termine de caer, casi íntegramente, en manos extranjeras?

R. Antes teníamos un instrumento, que era la Ley Rato, que permitía poner coto a estas operaciones si se consideraba necesario. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los grandes grupos eléctricos europeos son empresas públicas que, gracias a disfrutar de la protección de sus respectivos Gobiernos, cuentan con ingresos extraordinarios para poder afrontar operaciones corporativas más allá de sus fronteras mientras mantienen sus mercados cerrados al capital extranjero. La Unión Europea protege la libertad de circulación de capitales pero, en este caso, el mercado único, que es la base imprescindible para aplicar con eficacia ese principio de libertad de movimiento de capitales, dista mucho de ser una realidad en materia de energía y, por tanto, deberían reconsiderarse ciertas cuestiones.

P. Nuestro liderazgo y disposición hacia las energías renovables, ¿puede ayudar o per-

judicar en los deseos de mantener cierto control accionarial español?

R. Efectivamente, somos líderes en renovables, lo que es una ayuda, pero no una solución definitiva.

P. Pese a que España es el país con mayor dependencia del petróleo y tiende a elevarla a largo plazo, aquí algunos siguen contra la energía nuclear. ¿Qué piensa de este debate? ¿Está encantada REE de que dependamos mucho en el futuro de la energía nuclear francesa?

R. El interés de Red Eléctrica está en transportar energía con seguridad y eficiencia y no es de su incumbencia quién produce esos kw que transporta ni el tipo de tecnología empleada para producirlos. Personalmente pienso que es bueno el debate que está habiendo en casi todo el mundo sobre la energía nuclear en el nuevo contexto dominado sobre todo por dos hechos: la fuerte y sostenida tensión al alza de los precios de los productos fósiles y el protagonismo adquirido por los criterios de desarrollo sostenible y contención de la contaminación. En este contexto y pensando en la necesidad de diversificación energética, la energía nuclear, con todas las garantías de seguridad, está sobre la mesa de gobiernos y países que hasta hace poco ni se contemplaba. España es el país de la UE con una mayor dependencia del petróleo. Aquí hace falta un verdadero plan de ahorro energético que todavía no se ha diseñado. De la misma forma, hay que reabrir el debate sobre la energía nuclear y su relación con la seguridad de suministro energético y el desarrollo sostenible. No tiene sentido que aquí se diga no a lo nuclear y el Gobierno promueva, por otro lado, la importación de electricidad producida por centrales nucleares francesas. Felipe González ya advirtió a Zapatero de este contrasentido y los propios sindicatos empiezan a cambiar de actitud al respecto.

P. Como actor destacado y experto que fue en concertación social, ¿piensa que saldremos de la actual triple crisis -financiera, petrolera y alimentaria- sin un pacto social? ¿Qué tipo de acuerdo sería necesario si tuviera usted que diseñarlo?



EL PERSONAJE

JOSÉ FOLGADO BLANCO
Consejero y alcalde

Fue secretario de Estado de Presupuestos, Economía y Energía en sucesivos gobiernos del PP, en cuyo programa económico tiene gran influencia desde hace dos décadas; fue también una de las sorpresas en las pasadas municipales, al hacerse con la mayoría absoluta de Tres Cantos, donde llegó en 1983, con los primeros pobladores. “Creo que la segunda ciudad más “cultura” de España, tras San Cugat del Vallés, el 53% de los vecinos son licenciados medios o superiores”. De fuera llegan a trabajar diariamente 23.000 personas, porque alberga una larga lista de empresas punteras: Genetrix, Sener, GMV, Software AG, Siemens, Glaxo, BP Solar, Normon, Bionostra, Microsoft, Nivea, Danone, Unipapel, Repsol, Sogecable, Línea Directa... Hace unos meses, accedió al consejo de Red Eléctrica.

R. Estamos en la tormenta perfecta, cuyo resultado es la caída de la actividad y el aumento masivo del paro durante los dos próximos años. En realidad, el problema se centra en el paro y la falta de competitividad y ante esta debilidad económica, lo normal es que los desequilibrios de inflación y déficit exterior vayan a menos en los próximos meses y los tipos de interés inicien un claro descenso. El Acuerdo debe estar centrado en: salarios ligados a productividad, reforma gradual del mercado de trabajo conjugando flexibilidad y estabilidad laboral, y políticas ambiciosas de formación incentivadas en las empresas.

P. Con o sin acuerdo, ¿pará cuando prevé la recuperación y de qué factores principales depende?

R. De aquí a dos años. Lo fundamental es recomponer la competitividad y el empleo, para lo cual hace falta, entre otras cosas, bajar el tipo del impuesto de sociedades y permitir rápidas amortizaciones; bajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y compensándolo si fuera necesario con el IVA para mantener la neutralidad fiscal; un acuerdo social sobre la retribución y el mercado de trabajo, que afecte a los tipos de contrato y la formación; un esfuerzo en I+D que incluya la colaboración universidad-empresa; un plan especial de infraestructuras financiado parcialmente con deuda; mejorar la suficiencia energética y aplicar un plan de ahorro energético, para lo cual debe haber un acuerdo entre los dos grandes partidos, y dinamizar las instituciones reguladoras de los mercados, como la Comisión Nacional de la Competencia.

P. Hablemos de su otra especialidad, el gasto público. ¿Qué papel debe desempeñar en este momento y por qué?

R. El Gobierno debe dejar funcionar los estabilizadores automáticos y eso significa un cierto empeoramiento del saldo presupuestario con la crisis porque se ingresa menos y se pagan más prestaciones por desempleo. Pero como no ha habido hasta ahora control y austeridad en el gasto, la vuelta al déficit



público supone un problema añadido a la crisis, ya que su financiación se produce a costa del dinero que debe financiar la actividad privada generadora de empleo y se hipotecan las finanzas públicas de futuro.

P. ¿Tiene para usted algún interés el actual debate sobre las balanzas fiscales autonómicas? En esa dinámica, ¿por qué no empezar a hablar de las balanzas municipales o al menos de las grandes urbes?

R. No tiene ningún sentido hablar de balanzas fiscales porque quienes pagan impuestos no son los territorios, sino las personas físicas y jurídicas, cuyas rentas las obtienen, en muchas ocasiones, fuera del territorio de residencia. No tiene ningún sentido técnico. Otra cosa es que se quiera buscar un sentido político, como se está haciendo. Además, hay inversiones públicas que no se realizan

“Lo fundamental es recomponer la competitividad y el empleo, para lo cual hace falta, entre otras cosas, bajar el tipo del impuesto de sociedades y permitir rápidas amortizaciones...”.



“Habría que pensar, como en otros países, en apoyos presupuestarios a las renovables, no cargar todo en el recibo de la luz”



EL BANCO DE ESPAÑA Y LAS “OPERACIONES DE RIESGO INASUMIBLE”

Pregunta. ¿Quién debe promover la RSC? ¿Gobierno, empresas, mercados?

Respuesta. Siempre hubo discusión entre aconsejar o imponer. Tiene que ser más por la vía de la persuasión que de la imposición. Hay que fijar dos tipos de planteamientos. Por un lado, regulatorios en cuanto a maneras de actuación, para evitar cualquier tipo de falseamiento de la competencia y de las condiciones de mercado. Por eso hay que dar mucha importancia a los organismos reguladores, muy profesionalizados y con mando en plaza. Por otro, las empresas pueden y deben convertirlo en un activo de su balance.

P. Siempre se habla de RSC como asociada a las empresas que cotizan en Bolsa. A raíz de los problemas de las

cajas de ahorros con los créditos al sector inmobiliario, ¿no debería extenderse también a ellas?

R. En España, no se ha querido cambiar el modelo de cajas porque ha funcionado relativamente bien y es válida la máxima de no cambiar lo que funciona bien. No obstante, debería producirse un proceso de concentración porque el tamaño no es indiferente. En la gestión de las cajas hay dificultades políticas porque es patente el riesgo de utilizarlas como instrumentos de acción política. Pero si las cajas tienen problemas de naturaleza financiera, la culpa es del Banco de España, que no obliga al cumplimiento de las normas.

P. Sin embargo, la tónica habitual en muchas cajas, sobre todo las pequeñas y medianas, es la patrimonialización de las

mismas por parte de la cúpula directiva...

R. Los directivos en cualquier empresa tienen que contar con incentivos, pero estos deben ser muy claros. Hay dos tipos de excesos: los de carácter político y las actuaciones temerarias. Ambos tienen que ser absolutamente eliminados. El Banco de España tiene que impedir que los directivos lleven a cabo operaciones de riesgo inasumible.

P. El Gobierno quiere reformar la supervisión del sistema financiero. ¿Qué debería hacer?

R. Tenemos que ir a un modelo mucho más homogéneo con la zona euro. El Banco de España tendría que jugar un papel muy importante en el ámbito de la supervisión. Es la institución más objetiva y preparada.

“Hace falta, entre otras cosas, un plan especial de infraestructuras financiado parcialmente con deuda, mejorar la suficiencia energética y aplicar un plan de ahorro, para lo cual debe haber un acuerdo entre los dos grandes partidos”.

en una comunidad autónoma pero que revierten a ella porque contribuyen a su vertebración. Por ello, no se deberían utilizar en la negociación de la financiación autonómica.

P. ¿Qué perspectivas tienen las finanzas municipales con el actual ladrillazo y la desaparición del superávit estatal cuando eran tan dependientes de ambos?

R. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está haciendo un planteamiento muy correcto en el sentido de que los ayuntamientos están asumiendo competencias impropias, pero que la sociedad les demanda por ser el nivel de la administración más próximo a los ciudadanos. Son las puertas de entrada de las demandas de la sociedad. La FEMP valora su coste en unos 6.000 millones de euros. No tiene mucho sentido tener como base de financiación la actividad inmobiliaria y urbanística. Las finanzas municipales no pueden estar al albur de un frenazo inmobiliario ni las corporaciones locales pueden convertirse en especuladores inmobiliarios para obtener recursos para financiar sus actividades ordinarias. Además, las cesiones obligatorias de suelo están encareciendo las



viviendas, tanto las libres como las de protección oficial. Por ello, se deben fijar criterios que permitan tener una financiación adecuada sin que suponga un coste político. Los expertos apuntan a una financiación local en la que se revaloriza el papel del IBI y, sobre todo, de las tasas que cubren el coste de los servicios como estipula la Ley. Esto último resulta especialmente relevante en el actual contexto de aplicación obligada de la directiva comunitaria sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos, que va a encarecer en los próximos años sustancialmente este servicio de los municipios. **C**

“Ante esta debilidad, lo normal es que inflación y deficit exterior vayan a menos, y que los tipos de interés inicien un claro descenso ¿La recuperación? De aquí a dos años”